

Colombia en ebullición

Carlos Humberto Cascante Segura
(* para CAMPUS)

carlos.cascante.segura@una.cr

La pandemia golpea con especial virulencia a América Latina, cuyos gobiernos no solo enfrentan el desafío de salud pública más peligroso en años, sino también la acumulación de problemas vinculados con la desigualdad social que ha campeado históricamente por las urbes y el campo latinoamericanos. Pero no fue la pandemia la que despertó el hartazgo, los enormes levantamientos sociales en Chile, Bolivia y Ecuador previos al desgarrador arribo de la covid 19, así como el surgimiento de figuras autoritarias en Brasil, Nicaragua, Honduras y El Salvador, lo cual demuestra que las sociedades latinoamericanas están desechando las formas institucionales para hacer valer sus intereses y necesidades. Las democracias de baja intensidad latinoamericanas han demostrado ser insuficientes para provocar transformaciones que mejoren las condiciones de vida de sus integrantes.

La Colombia de levantamientos, abusos policiales, amenazas a los líderes de los movimientos sociales y algunos actos vandálicos recientes son un nuevo, y no por ello menos impactante, ejemplo de estas estructuras. La espiral de violencia que explotó en las ciudades más importantes de Colombia: Bogotá y, particularmente, en Cali, tuvo antecedentes cercanos durante el 2019, cuando un paro nacional fue considerado como la manifestación social más grande en los últimos 60 años y en el 2020, cuando se produjeron protestas en contra de las medidas de restricción impuestas para evitar la propagación de la covid 19. En ambas avanzadas sociales quedó expuesto que la protesta tenía un enorme contenido social; sin embargo, más que un proceso pensado constituía un estallido social de distintos sectores, cuyos intereses diferían considerablemente dada la presencia de estudiantes, centrales obreras y organizaciones indígenas, los que intentaron consolidarse en el denominado "Comité Nacional del Paro", que elaboró un pliego de peticiones de carácter general y gremial.

Si en 20 años la economía ha logrado crecer, en el último lustro este avance se ha ralentizado. Además, pese a la esperanza que trajeron los acuerdos de paz, el país no ha logrado superar o incluso reducir definitivamente una desigualdad regional avasalladora que constituye una incómoda constante en la historia de ese país. En este sentido,



foto: juangonzales/Shutterstock.com

Probablemente, estas manifestaciones hubiesen surgido frente a cualquier gobierno, pero las políticas del gobierno del Centro Democrático, que llevó a la presidencia a Iván Duque, han contribuido a que el proceso se acelere y sea más difícil de detener.

el Índice de Desarrollo Regional Latinoamérica de 2020, cuyos resultados se produjeron previo a los efectos de la pandemia, demostraron que Colombia constituye el país más desigual de América Latina y que esa desigualdad tiene un carácter regional evidente. Así, de los seis territorios con menor nivel de desarrollo en América Latina cuatro son colombianos. Desde esta perspectiva, pese a los acuerdos de paz celebrados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cierto es que el país mantenía su condición de una bomba de tiempo, en que solo faltaba un movimiento en falso para echar a andar una explosión social de las dimensiones que se han observado.

Probablemente, estas manifestaciones hubiesen surgido frente a cualquier gobierno, pero las políticas del gobierno del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que llevó a la presidencia a Iván Duque, han contribuido a que el proceso se acelere y sea más difícil de detener. Aunque puede plantearse que el paquete de impuestos propuesto en abril fue el detonante coyuntural (la nueva legislación en cuestión establecía la obligación de pagar impuestos para salarios mayores de 470 dólares en 2023, mientras que se establecía un impuesto temporal a la riqueza, adicional al de renta, por dos

años), lo cierto es que la oposición, desde el Ejecutivo, para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, la falta de políticas de reforma para ampliar y mejorar los sistemas de salud, pensiones, situación del agro y la educación, así como la represión y militarización del país en las protestas de 2019 y 2020, sumada a la negligencia para perseguir los delitos cometidos contra líderes comunales, han contribuido a que el gobierno conducido por el presidente Duque pierda la moderada legitimidad con que llegó al poder hace unos dos años, frente a la izquierda representada por Gustavo Petro.

Tras dos semanas de este panorama, las respuestas autoritarias han costado más de 20 vidas, lo que llevó incluso a Duque a aceptar que "se cometieron algunos abusos", mientras los procesos de negociación no parecen avanzar con la celeridad deseada. Los líderes del Comité Nacional del Paro han señalado que el objetivo del gobierno consiste en dar largas al proceso, para debilitar la relación existente entre los grupos del Comité y que se diluya la protesta social. Por otra parte, los miembros del Comité entienden que es complicado un acuerdo sobre el total de sus peticiones y que no podrán concitar el apoyo nacional con que hasta el momento

han contado por un periodo de tiempo extendido. Por consiguiente, el verdadero reto está en reencaminar las protestas en mecanismos institucionales, que permitan producir cambios transformadores de la realidad estructural colombiana, lo que necesariamente pasará por una reforma fiscal equitativa. Resulta indispensable señalar que estos eventos concurren con los preparativos para unas nuevas elecciones, por celebrarse en mayo del próximo año, cuyas candidaturas y relatos sin lugar a duda estarán condicionados por los resultados de una posible negociación o la continuidad de la crispación social.

Los enfrentamientos llevan a la sociedad colombiana a una nueva encrucijada, la segunda tras los debates que se produjeron con los acuerdos de paz de hace casi un lustro. Esta dicotomía podría ser incluso más relevante que la anterior, pues plantea un proceso de reconstrucción del pacto nacional por uno más equitativo, o bien, el uso de la militarización y la violencia para reprimir los actuales estallidos, que podría tener como legado décadas de nuevas guerrillas y polarización de una sociedad que ya ha sufrido lo suficiente.

* Académico e investigador Escuela de Relaciones Internacionales-UNA